



GARCÍA CORDERO

El compromiso de Zoido con la Unesco no impedirá la construcción de otros rascacielos

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha prometido a los miembros del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido en San Petersburgo, que "no habrá más torres" en la zona de La Cartuja donde se

está construyendo el rascacielos diseñado por César Pelli —como puede verse en la fotografía— porque "no son necesarias ni convenientes". Zoido volverá hoy de su viaje a Rusia con la seguridad de que la Unesco

no incluirá a Sevilla en su *lista negra*, la de las ciudades con patrimonio en peligro, y que la Catedral, el Archivo de Indias y el Real Alcázar seguirán siendo Patrimonio de la Humanidad. Para conseguirlo, el al-

calde ha tenido que comprometerse a modificar el PGOU para que la Torre Pelli se convierta en un hecho aislado y el crecimiento en altura se ubique en otra zona de Sevilla, lejos del centro histórico.

La rebelión de los médicos por los recortes se extiende por los hospitales

Más de la mitad de los tutores de los MIR de Córdoba presenta su dimisión

R. RINCÓN / M. J. ALBERT
Sevilla / Córdoba

Concentraciones, encierros, huelgas y dimisiones. El malestar por el recorte de sueldo aprobado por la Junta para los trabajadores públicos crece entre los profesionales sanitarios. Las protestas se extienden por los hospitales andaluces. Unas aus-

piciadas por algún sindicato y otras de forma más espontáneas. Tras semanas de concentraciones a las puertas de los centros y marchas a las sedes de la Junta, médicos, enfermeros y personal de servicios y administración han dado una vuelta de tuerca a sus movilizaciones.

Los trabajadores de la empresa pública Hospital de Poniente,

en Almería, han convocado para hoy la primera jornada de huelga de un hospital andaluz tras el plan de ajuste aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno. En Córdoba, 54 de los 91 tutores de médicos internos residentes (MIR) del hospital Reina Sofía anunciaron su dimisión en una reunión urgente convocada por la Unidad Docente del hospi-

tal. Estas dimisiones afectan al 70% de los 322 médicos que actualmente realizan la residencia en el Reina Sofía. En este hospital también dimitido 15 miembros de la Junta Facultativa, un órgano compuesto por médicos que asesoran a la dirección del hospital. En la del Clínic de Málaga han dimitido 10.

PASA A LA PÁGINA 3

La Universidad de Granada admite apuros con la tesorería

V. C., Granada

La Universidad de Granada reconoció ayer que tiene "ciertas tensiones de tesorería" puesto que desconoce cuándo podrá cobrar 258 millones de euros que están pendientes por parte de instituciones y empresas, principalmente de la Junta puesto que es la que más financia al tener las competencias. La UGR confía en que el cobro se produzca en "los próximos meses".

El gerente de la universidad, Andrés Navarro, explicó, no obstante, que "no hay motivos de alarma" ni tampoco "evidencias" de que no se vaya a cobrar, según expuso durante la presentación de las cuentas de 2011. De hecho, el resultado presupuestario es positivo y la UGR cuenta con un remanente de tesorería de 33,4 millones de euros. Una situación que definió como "equilibrio financiero razonable".

Cinco años de políticas de austeridad y racionalización del gasto han permitido a la institución académica estar "saneada" y seguir siendo "solvente", según el gerente, que destacó que "no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades". Según la liquidación del presupuesto, la UGR ha tenido 455 millones de euros de ingresos y 431 de gastos.

El secretario sale en defensa de Alaya

El funcionario niega que la juez de los ERE gritara al exconsejero Fernández

J. M.-A., Sevilla

Un capote a la juez Mercedes Alaya frente a las críticas de los abogados. El secretario del juzgado que instruye el caso de los ERE ha negado que la magistrada gritara durante la extensa declaración del exconsejero Antonio Fernández, que se prolongó durante cuatro días. La insólita diligencia del secretario viene motivada por las duras réplicas que dirigieron los letrados ante las voces y maneras que utilizó la juez durante el interrogatorio.

"Hace imposible que se escuchara desde fuera la voz de la magistrada, que dicho sea de pa-

so tiene un tono de voz bajo, o de cualquiera de los presentes", sostiene el secretario en un escrito. Sin embargo, la voz de la juez se escuchó de manera nítida a través de la puerta en ciertas ocasiones durante los cuatro días. A continuación, Alaya impidió que los periodistas estuvieran a las puertas de la sala en las declaraciones posteriores a la de Fernández, y obligó a que fueran desplazados hasta una sala alejada.

El letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, censuró el tercer grado de Alaya: "No nos referimos solo a tonos elevados de voz, gestos claros de desaprobarción o disgusto ante res-

puestas del Sr. Fernández (...) Es que por parte de la instructora no se duda en espetarle: 'Ahora me cuenta usted otra' lo que revela claramente que en el ánimo de la misma no existía la menor intención de creer, en modo alguno, cualquier afirmación o explicación del imputado". El abogado Julio Martínez insistió: "¿Y qué hay de las voces de la magistrada instructora al imputado Fernández, que salió publicado hasta en las redes sociales?".

Ahora el secretario niega la mayor: "Respecto del presunto mal trato recibido por el imputado, al haberse dirigido supuestamente su señoría al declaran-

te en alta voz, en modo alguno tuvo lugar tal hecho".

Por otra parte, un informe del Ministerio de Economía incorporado al sumario estima que en el ERE de González Byass en el que estuvo incluido el exconsejero Fernández aunque finalmente no cobró su póliza prevista, las comisiones previstas para el mediador (la consultora Uniter) eran de un 10%, lo que suponía 812.659 euros más que la media del mercado en el momento en que fue suscrita la póliza. De momento, la Junta solo ha pagado un sobrecoste de 30.871 euros respecto a la media del mercado.